

Economía necesaria

Alfonso Carbajo

Jorge Juan

Economía de Urgencia

Barcelona, Ariel, 2013

160 pp. 14 €

Más conocida por sus siglas, FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, haciendo honor al nombre, lleva más de un cuarto de siglo fomentando la investigación rigurosa de los problemas más relevantes de la economía española. En centenares de documentos de trabajo, monografías e informes, los investigadores afiliados a FEDEA han evaluado las cuestiones sociales más diversas –y las políticas económicas aplicadas o propuestas para su solución–: desde la inmigración al sistema sanitario, desde la fiscalidad a la educación, desde el sector energético al sistema de pensiones.

En 2009, apareció en el marco de FEDEA el blog *Nada es Gratis*[1], convirtiéndose muy pronto en uno de los mejores blogs de economía existentes en toda la red y en el observatorio más fiable de la evolución de la crisis financiera. El blog ha tenido la virtud de hacer comprensibles para los no especialistas cuestiones tan complicadas como el funcionamiento del mercado eléctrico o la contabilidad del FROB o del Fondo de Garantía de Depósitos, divulgando sin vulgarizar. Como es natural, no todas las entradas han alcanzado el máximo de brillantez o profundidad, y las ha habido oscuras y aburridas. Pero el nivel medio de calidad es extraordinariamente alto, lo que dice mucho de la competencia de los editores.

En 2011, bajo el pseudónimo de Jorge Juan[2], apareció *Nada es Gratis: Cómo evitar la década perdida tras la década prodigiosa*, una obra de doscientas cincuenta páginas que es una excelente radiografía de la economía española, de sus problemas y de las necesarias reformas, escrita desde la perspectiva de algunos de los colaboradores más activos del blog.

A finales de 2013, Jorge Juan[3] publica otra obra, *Economía de Urgencia*, original tanto por su estilo como por su singular proceso de gestación. En la primavera de 2013, los autores, divididos por parejas, visitaron tres colegios, reuniéndose con los alumnos de primero de bachillerato. Sin ninguna exposición previa, invitaron a los estudiantes a que les hicieran las preguntas que quisieran, a las que trataron de dar las mejores respuestas. El libro es la exposición organizada de aquellos diálogos espontáneos, en un texto de menos de ciento cincuenta páginas en las que se analizan, en un lenguaje sencillo, los problemas más palpitantes de la sociedad española.

La obra retiene toda la frescura de las inquietudes de los jóvenes estudiantes que le proporcionan el planteamiento. ¿Por qué Cristiano Ronaldo gana más que un médico, a pesar de que éste se dedica a salvar vidas? ¿Por qué hay tanto paro juvenil? ¿Por qué

unos ganan tanto y otros tan poco? ¿Por qué existe la corrupción? ¿Quiénes son los culpables de la crisis? ¿Vale la pena estudiar? ¿Por qué muchos jóvenes con carrera tienen que emigrar? ¿Por qué es tan difícil para un joven comprar una vivienda? ¿Ganan demasiado dinero los políticos?

Las preguntas manifiestan la inquietud juvenil de los protagonistas, pero las respuestas, expuestas con sencillez y amenidad, no son cosa de niños. Este libro es mucho más serio y riguroso que toda la ristra de publicaciones pretenciosas que han surgido en estos años con la finalidad de propagar las recetas milagrosas de sus autores para el tratamiento de la crisis financiera, obras repletas de teorías conspiratorias y de lugares comunes.

Los autores han organizado el material en cuatro partes. Una introducción en la que explican qué es la Economía, «la tensión entre incentivos individuales y colectivos», y la relación entre Economía y Justicia. La segunda parte agrupa los temas relativos a la educación y el mercado laboral. La tercera está dedicada a las causas de la crisis en España. La cuarta esboza las soluciones para un futuro mejor. No se pueden decir tantas cosas tan bien y en tan corto espacio.

Los autores destacan el papel crucial de los incentivos como determinantes del comportamiento. El objetivo deseable de reducir la desigualdad, por ejemplo, mediante un sistema de impuestos progresivos con transferencias a los más pobres, tiene un coste en términos de eficiencia porque los tipos marginales altos y las transferencias reducen los incentivos al trabajo y a la asunción de riesgos. En el límite, la búsqueda de la igualdad absoluta reduciría a toda la sociedad al mismo nivel de pobreza. Los incentivos explican muchos de los problemas de nuestra sociedad, desde la corrupción política a la calidad tercermundista de la enseñanza universitaria.

El recurso sistemático a la evidencia empírica les permite destruir muchos clichés y lugares comunes. Uno de ellos es la creencia de que la solución de los problemas presupuestarios se consigue eliminando las Comunidades Autónomas, los coches oficiales, los asesores personales o los sobresueldos de los políticos, sin necesidad de tocar la sanidad o la educación. Los ahorros por esas vías son tan escasos y la magnitud del déficit tan grande que es imposible reducir este último sin recortar sustancialmente el gasto público en educación o en sanidad, o sin elevar significativamente la recaudación impositiva. Las Comunidades Autónomas gastan en educación y sanidad; su eliminación no eludiría la necesidad de reducir los gastos en esas partidas. Las televisiones, los coches oficiales y otras prebendas deberán eliminarse en la medida en que constituyan un despilfarro, pero no porque representen una solución al problema del déficit.

Otro mito que destruyen de paso es el que sostiene que la política de austeridad presupuestaria preconizada por la troika ha sido innecesaria y nociva. Cuando un país está, como ha estado España, al borde de la bancarrota, los inversores nacionales y extranjeros no tienen incentivos para invertir en su deuda pública a menos que estén convencidos de la voluntad firme del gobierno de equilibrar sus cuentas. Los países, como Chile o Luxemburgo, que tienen una situación financiera saneada pueden permitirse una política fiscal expansiva en tiempos de crisis; por desgracia, las economías con un fuerte endeudamiento exterior y una deuda pública creciente no

pueden permitirse ese lujo. Tras la década de excesos, la austeridad era inevitable y deseable, lo que no significa que haya que aprobar los medios con los que se ha llevado a cabo esa política de austeridad. Jorge Juan está a favor de mantener las inversiones en educación e investigación, aumentando posiblemente la recaudación tributaria mediante la eliminación de muchas de las bonificaciones fiscales existentes.

Los autores son académicos distinguidos, familiarizados con el funcionamiento de las mejores universidades del mundo, a la par que conocedores directos de la universidad española, y esto se advierte claramente. El capítulo sobre el estado actual de la universidad es una crítica implacable del sistema endogámico, rutinario, conservador y parasitario que la caracteriza. Es el ejemplo acabado de un mecanismo perverso en el que los incentivos individuales inducen al nepotismo y a la búsqueda de rentas públicas, en detrimento de la investigación y de la calidad de la enseñanza. Es significativo que las cuatro universidades españolas que ocupan los puestos más avanzados en el ranking mundial, a enorme distancia del resto -Pompeu Fabra, Carlos III, Autónoma de Barcelona y Universidad de Alicante- se distinguen precisamente por haber sofocado la propensión a la endogamia. Muy resumidamente, la propuesta de Jorge Juan se centra en fomentar la competencia -sobre la base de una mayor autonomía y la responsabilidad correspondiente- entre los protagonistas de la educación superior: competencia entre los estudiantes, entre los profesores y entre los centros universitarios. La autonomía de los centros -y la suficiencia de sus recursos- se reforzará mediante la liberalización de las tasas universitarias y la libertad de contratación de profesores e investigadores. La elevación de las tasas no debería, por otro lado, impedir el acceso a la carrera de su elección a los alumnos capaces y motivados si se utilizara el mecanismo de ayuda apropiado. Jorge Juan se inclina por el sistema inglés o el australiano, en el que el Estado concede un crédito al estudiante que este sólo está obligado a devolver si -y cuando-, terminados sus estudios, perciba ingresos suficientes para tributar por el impuesto sobre la renta. Normalmente, la alta rentabilidad de la inversión en capital humano que entraña una buena educación superior permitirá al universitario pagar sin dificultades el principal y los intereses del préstamo. En el supuesto desafortunado de no terminar la carrera o de no encontrar el empleo adecuado, el estudiante no tendrá que devolver el préstamo, lo que reduce considerablemente el riesgo de su inversión. Por otra parte, el mecanismo elimina el riesgo moral, porque para el estudiante siempre es preferible la alternativa de estar obligado a devolver el préstamo a la de percibir ingresos insuficientes y quedar exento.

Las soluciones para un futuro mejor no son, en modo alguno, revolucionarias, sino de sentido común. Consisten, en gran medida, en copiar las cosas que funcionan bien en los países dignos de ser imitados y a los que queremos igualar. Parecen revolucionarias por la resistencia que oponen a su implantación los grupos cuya posición privilegiada depende del *statu quo*. Se trata de mejorar la competitividad gracias a un mejor funcionamiento del mercado de trabajo, a la eliminación de obstáculos a la competencia y al apoyo a la educación y al I+D. Hay que sustituir la multiplicidad de contratos laborales existente por un contrato único en el que el coste del despido aumente con la antigüedad del contrato. La distinción entre fijos y temporales debe desaparecer. Y para reducir el paro juvenil tendrán que bajar los salarios relativos de los jóvenes, implantando un sistema de aprendizaje como el alemán. Entretanto, la emigración a otros países europeos no es ninguna tragedia. En una economía global, el ámbito geográfico relevante de oportunidades de trabajo ya no es España, sino la

Unión Europea.

Estamos ante un libro excelente y lo mejor que puede hacerse con él es leerlo. Por ello, recomiendo su lectura no sólo a los estudiantes de bachillerato, que son en cierto modo los causantes de su producción, sino a las amas de casa, a los comerciales y, sobre todo, a los economistas. El nivel del debate político mejoraría considerablemente si llegaran a leerlo –y a asimilarlo– los políticos y los periodistas, en especial los que participan habitualmente en las tertulias de radio y televisión.

Pero, como dijo Billy Wilder, nadie es perfecto, y un fallo del libro es su brevedad. Parece que la economía de urgencia hace referencia a la urgencia en terminarlo. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Pero siempre que la brevedad, por excesiva, no haga sentir que la lectura se ha terminado demasiado pronto. Las restricciones editoriales son un misterio, pero, en mi opinión, cincuenta páginas más hubieran permitido tratar con más extensión algunos temas, proporcionando más placer al lector, y conservando la obra, al mismo tiempo, las dimensiones de un breviario.

Los otros reparos menores que puedo hacer se derivan de este. Las siete páginas del capítulo primero, dedicadas a discutir si la Economía es una ciencia, si es una ciencia moral, si es una ciencia del engaño, etc. –un canto a la importancia de la asignatura–, parecen excesivas –y no porque estén mal, sino todo lo contrario–, precisamente porque acaban por sustraer texto al tratamiento de los temas concretos.

La preocupación por la concisión resulta, en ocasiones, en afirmaciones de un tono más dogmático del que usarían los autores si dispusieran de más espacio para matizar la expresión o señalar excepciones. Un ejemplo es el caso de los sueldos de los políticos. Jorge Juan muestra que los altos cargos españoles ganan menos que los de países comparables y aboga por una retribución más alta para los miembros del Gobierno por dos razones: atraer el mejor talento a los puestos de responsabilidad pública y evitar que el ejercicio de la política, en cuanto hobby, sea monopolio de las clases estériles.

Sin una reforma política profunda, la elevación de las retribuciones de los altos cargos no haría que fuesen ocupados por las personas de mayor talento, porque la designación de los ministrables seguirían haciéndola los aparatos de los partidos. Simplemente, José Blanco o Javier Arenas tendrían más zanahorias que ofrecer a sus incondicionales. Es posible –pero no seguro– que, triplicando, por ejemplo, las retribuciones de los ministros, el desempeño de una cartera llegara a atraer a un número mayor de profesionales del máximo nivel que el que se siente atraído ahora. Pero, sin mejorar las condiciones de transparencia y competencia en la vida política, ¿los aparatos de los partidos seleccionarían como ministrables a los más competentes o, como vienen haciendo hasta ahora, a los más dóciles? El problema no está tanto en la inteligencia, honradez y entusiasmo de los aspirantes como en la imparcialidad y buen juicio de los comités de selección. A lo mejor, si en España el Consejo del Reino hubiera instituido en el siglo XVII unos premios a la exploración estelar, los conocimientos astronómicos habrían avanzado significativamente, siempre que no hubiera tenido el control de los premios Niccolò Lorini, el teólogo que denunció a Galileo ante el Santo Oficio.

Pero lo importante es que este libro se lea.

Alfonso Carbajo es técnico comercial del Estado.

[1] En abril de 2014, los editores del blog han anunciado que, transcurrido un período transitorio, el blog *Nada es Gratis* se separará totalmente de FEDEA.

[2] Jorge Juan, el nombre de la calle de Madrid donde tiene su domicilio FEDEA, es el nombre colectivo en este caso, de Samuel Bentolila, Antonio Cabrales, Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano, Juan Rubio-Ramírez y Tano Santos, todos ellos colaboradores activos en el blog.

[3] El pseudónimo es el mismo pero algunos autores han cambiado. En esta ocasión son Javier Andrés, Samuel Bentolila, Antonio Cabrales, Marco Celentani, José Ignacio Conde-Ruiz y Juan Rubio-Ramírez.